

Boletín Oficial

PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Pedro Lozano, Calle de San Pedro núm. 14, á 80 rs. al año para esta Capital, y 96 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 356.

Con el fin de evitar los abusos e ilegalidades que se cometen frecuentemente por algunos de los encargados del buen régimen, fomento, conservación y beneficio de los montes del Estado, de los de propios, comunales y de establecimientos públicos no menos que por particulares, debidos en su mayor parte al poco ó ningun conocimiento que tienen de las ordenanzas, reglamento y demas disposiciones vigentes del ramo, he dispuesto publicarlas inmediatamente en el Boletín oficial de la Provincia, para que unos y otros cuiden de su mas puntual observancia, único medio de salvar la responsabilidad en que incurrerán, la cual de hoy mas se hará efectiva á los contraventores. Orense Julio 10 de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

ORDENANZAS GENERALES DE MONTES.

Real decreto.

De muy antiguo se vió que iban des-

truyéndose los arbolados; y en la creencia de que este daño procedia de falta de precauciones para su conservación, se multiplicaron estas tanto que llegaron á sofocar la industria que estaban destinadas á favorecer. Entretanto el mal crecia como crecen todos cuando no se atina con el remedio, y siendo urgente proporcionarlo eficaz, impedir la ruina completa de los montes, y facilitar su replantacion progresiva, mandó mi augusto Esposo (Q. E. E. G.) que una Junta compuesta de personas de su confianza, reuniendo las consultas y proyectos formados en diferentes tiempos para mejorar estos intereses, y tomando por guia los principios de Justicia, y el respeto debido á la propiedad, propusiese los medios que juzgase mas á propósito para que el interes individual concurriese con la autoridad pública al logro de sus benéficas intenciones. Y visto lo que dicha Junta me ha propuesto, y oido el dictámen del Consejo de Gobierno y del de Ministros, he venido en decretar en nombre de Mi amada Hija la Reina Doña Isabel II las siguientes

ORDENANZAS GENERALES DE MONTES.

TITULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 1.º Bajo la denominacion de Montes, para los efectos de estas Ordenanzas, se comprenden todos los terrenos cubiertos de árboles á propósito para la construccion naval ó civil, carbonco, combustible y demas necesidades comunes, ya sean montes altos, bajos, bosques, sotos, plantíos ó matorrales de toda especie distinta de los olivares, frutales, ó semejantes plantaciones de especial fruto ó cultivo agrario.

2.º La autoridad á quien con el nombre de Direccion general de Montes he venido en encargar el cumplimiento de estas Ordenanzas, tendrá por objeto final en el ejercicio de sus funciones el restablecer á los respectivos dueños de Montes en el pleno goce de los legítimos derechos de su propiedad, promover la aclaracion y fijacion de

estos derechos donde se hallen confusos ú oscurecidos, y concurrir á solicitar en favor de los mismos derechos, y del aumento y mayores productos de este ramo de riqueza pública, la accion tutelar que las leyes y mi gobierno ejercen en defensa de todo dominio.

Cesan por consiguiente desde la publicacion de estas Ordenanzas todas las jurisdicciones privativas ó privilegiadas que bajo cualquier título ó denominacion han entendido mas ó menos directamente en la administracion, gobierno ó conocimiento de causas de montes, reasumiéndose todo por los Juzgados y Tribunales Reales, ó por la Direccion general en el modo y términos que aqui se prescriben.

3.º Todo dueño particular de montes podrá cerrar ó cercar los de su pertenencia, siempre que los tuviere deslindados y amojonados, ó provocar el deslinde y amojonamiento de los que aun no lo estuvieren; y una vez cerrados ó cercados, podrá variar el destino y cultivo de sus terrenos, y hacer de ellos y de sus producciones el uso que mas le conviniere.

4.º Quedan dependientes de la administracion y gobierno de la Direccion general los montes realengos, baldíos, y demas que no tengan dueño conocido. La Direccion se hará cargo de todos ellos, y tomando por de pronto las medidas que le parecieren mas necesarias y útiles, formará y me propondrá el reglamento ó reglamentos que, obtenida mi Real aprobacion, hayan de regir en adelante.

Asi en la formacion de estos reglamentos como en las medidas provisionales que tomare, tendrá muy presentes los derechos de los dueños de montes confinantes, y separará las funciones puramente administrativas de las de conservacion y gobierno que la misma Direccion ejerce en los otros montes que se le encomiendan.

5.º Quedan tambien dependientes de la guarda y conservacion de la Direccion general, y con sujecion al régimen prescrito en estas ordenanzas:

1.º los montes de propios ó comunes

de los pueblos; 2.º los pertenecientes á hospicios, hospitales, universidades ú otros establecimientos públicos dependientes de mi Real proteccion y gobierno; y 3.º aquellos en que la Real Hacienda, los pueblos, ó los establecimientos públicos tengan condominio ó comunidad de disfrutes ó usos con otro cualquiera propietario.

6.º Todo dueño de montes, y la Direccion general en los que se ponen bajo su administracion ó régimen, que tuviere algun monte pro indiviso con otro propietario, podrá pedir su particion, y á ella se procederá por ante el Juez del territorio del monte, siempre que no haya podido verificarse por avenencia ó convenio de las partes, ó por la via gubernativa que se señalará para los casos en que la particion haya de ser de montes dependientes ó en administracion, ó en régimen de la Direccion general.

7.º Si la indivision no consiste en porciones del terreno, sino en la promiscuidad de usos, aprovechamientos ó servidumbres, podrá el dueño del suelo y en sus respectivos casos la Direccion, proponer y solicitar igualmente el rescate de todas ó cualquiera de estas cargas, bien cediendo una parte del monte, si el uso ó carga consistiere en leñas ó maderas, bien por otro cualquier medio de indemnizacion, si la carga consistiere en yerbas, pastos, ú otros aprovechamientos semejantes.

8.º Ni á las particiones de los terrenos, ni á los rescates de que hablan los dos artículos precedentes, será obstáculo la calidad de vinculacion, ó de pertenencia á manos muertas que obren de parte de aquel á quien se propone la particion ó rescate. Mas esto deberá hacer la aplicacion ó inversion de lo que así le cupiere con la autorizacion superior, y con la intervencion de quien fuere necesario, segun su respectiva fundacion ó estatuto.

9.º Los dueños de montes sujetos á vinculacion, podrán, de acuerdo con su inmediato sucesor, pedir mi Real licencia para hacerlo, por la Secretaria del Despacho del Fomento general del Reind. Este acuerdo debe acompa-

dar desde luego á la petición, y expresarse en él las razones de conveniencia que motivan la enagenación, y la inversión que han determinado dar á su producto, bien sea en mejora de otras fincas del mayorazgo, ó bien en adquisiciones nuevas.

Sin embargo no se permitirá la enagenación de parques ó solos contiguos á los palacios ó casas principales de vinculaciones, sin incluir en su venta los edificios mismos: y tales enagenaciones se solicitarán por la Real Cámara en la forma ordinaria para las ventas de cualesquier otros bienes de mayorazgo.

10. En los montes en que está separado el dominio útil del directo, podrá el dueño útil ofrecer al directo el rescate de todo ó de una parte del canon con que le contribuya, y la redención se hará bien por precios ó permutas convencionales, bien por cesión de alguna parte del terreno para que se consoliden en cada porción ambos dominios, bien por equitativa apreciación del valor del canon, á razón de veinte y cinco de capital por cada uno de renta.

11. Se prohíbe para en adelante sujetar ningún monte á vinculación; como también su enagenación, sea por causa onerosa ó lucrativa, á manos muertas, corporaciones ó establecimientos públicos de ningún género. Si por donación ó testamento se les dieran ó legaran montes, se venderán estos en provecho del donatario, ó legatario, á cuya disposición se pondrá su importe. Los Ayuntamientos de los pueblos en cuyo territorio se hallen tales montes, y los Comisarios ó empleados de la Dirección general, cuidarán de la observancia de esta disposición, si no hubiese pariente ó interesado particular que la promoviere.

12. Cesan desde la publicación de estas ordenanzas todos los derechos de apropiación, visita, marca, tanteo ó preferencia que hasta aquí han ejercido la Marina Real ó cualesquier otros establecimientos del Estado. Los Gefes de estos establecimientos á que se hallaren especialmente afectos algunos montes, se concertarán para lo que necesitare, sacar de ellos, ya con los dueños particulares en los que á estos pertenezcan, ó ya con la Dirección en los que van puestos á su cuidado, acerca de la entidad del pedido, su precio, modo y términos de ejecutarlo.

TÍTULO II.

De los montes puestos bajo la guarda y régimen de la Dirección general.

SECCION 1.

SU ADMINISTRACION Y DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL.

13. La administración de los montes de propios y comunes de los pueblos que esté actualmente en mano de sus Ayuntamientos respectivos, continuará al cuidado de estos; y sus productos se aplicarán á beneficio de los mismos propios ó vecindarios á que hoy deben pertenecer. Lo mismo se hará con la administración y productos de los que se deslindaren y declararen sucesivamente de su respectiva pertenencia: todo con sujeción por ahora á las resoluciones provisionales que tomare la Dirección general, y á los reglamentos locales que se formarán con Mi Real aprobación.

14. Los montes de establecimientos públicos, seguirán administrándose por los encargados de estos establecimientos con dependencia de la Dirección general en cuanto tenga relación con la observancia de las presentes Ordenanzas.

15. En los montes que se administran por la Dirección general, ó que estén bajo su guarda y régimen, no podrá hacerse enagenación, permuta, partición ni rescate, sino por medio de la Dirección, la cual pedirá para ello Mi Real aprobación.

16. Tampoco se procederá sin Mi Real permiso, á consulta de la Dirección, á ningún rompimiento, ó variación esencial de cultivo; ni á convertir en monte ó arbolado terreno alguno hoy raso y destinado á pastos.

17. El Ayuntamiento en los montes de propios y comunes, la Junta ó Gefe de administración de los establecimientos públicos, y los administradores de realengos que creyesen útil hacer algo de lo explicado en los dos artículos precedentes enviarán sus propuestas fundadas y documentadas convenientemente al Director general, para que proceda á la demás instrucción necesaria para someterlas á Mi Real aprobación.

18. El Ayuntamiento ó Gefes de administración que por sí solos procedieren á semejantes actos, incurrirán en una multa no menor de mil reales, ni mayor de quince mil, y serán condenados al resarcimiento de los daños y perjuicios que resultaren: y lo que hubieren hecho se declarará nulo.

19. Todo monte de propios, del común ó de establecimientos públicos que ni tenga arbolados, ni parezca apto para oriarlos, se entregará desde luego por la Dirección á los Ayuntamientos ó Gefes de administración de dichos establecimientos para que los incorporen á las otras fincas de su pertenencia respectiva, sin sujeción en adelante á la Dirección general de montes.

Si tales terrenos fuesen de los administrados como realengos, ó que no tienen dueño conocido, la Dirección general me consultará su enagenación, ó lo que entienda ser mas útil al Estado.

20. Los deslindes y amojonamientos que, bien á instancia de cualquiera de los interesados, bien por disposición de la Dirección general hubieren de hacerse de montes confinantes, linderos por todas partes con pertenencias de realengos, de propios, comunes ó establecimientos públicos, se ejecutarán por el Comisario especial de la Dirección, asistido de un perito agrimensor de la misma, y con intervención del administrador ó apoderado de cada cual de los interesados, y del perito agrimensor que cada uno de estos quisiere nombrar: concluidas las diligencias se remitirán á la Dirección general, donde se oirán informalmente, si hubiere algunas reclamaciones, y lo que definitivamente se resolviera se someterá á Mi Real aprobación.

(Se continuará.)

Número 357.

El Sr. Juez de primera instancia de Ponferrada, con fecha 9 del actual, me dice lo siguiente.

«En la noche del 15 de Junio último fué robada en la Iglesia del pueblo de Yebra en este partido judicial, estrayéndose de ella un copon con una cruz al remate de pesar seis onzas: unas ánforas de peso de 5 onzas, todo de plata; y dos albas una de lienzo de Santiago con guarnición de encaje, y otra de lienzo del país con guarnición de hilo.

Entre las disposiciones adoptadas para el descubrimiento de los autores del delito, he acordado oficiar á V. S. como lo ejecuto, para que por medio del Boletín oficial, se sirva encargar á los Alcaldes y demás Autoridades de

su dependencia que por cuantos medios estén á su alcance sugieran el paradero de las citadas alhajas, arrestando y conduciendo con seguridad á la cárcel de esto juzgado la persona ó personas que fueren aprehendidas con ellas.

Del recibo de esta comunicación, se dignará V. S. darme aviso para unir á la causa.»

Lo que se inserta á los fines que se piden, cuyo servicio recomiendo al celo y actividad de los Sres. Alcaldes, fuerza de la Guardia civil y demás dependientes de mi autoridad. Orense 13 de Julio de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 358.

El Alcalde de Castrelo de Miño, con fecha 10 del actual, me dice lo siguiente.

«Por parte que acaba de darme el celador de la parroquia de S. Salvador de Vide, resulta que José Rodríguez, hijo de María Duran de la misma vecindad, acostumbraba á salir de casa y ocuparse en pordiosar regresando á ella pasados 14 ó 15 días; pero que habiendo salido con dicho objeto el día 10 de Mayo último, no ha vuelto aun y se ignora su paradero, cuya novedad me participa para que lo haga yo á V. S. á fin de conseguir si es posible noticia cierta de su existencia ó defunción. También aparece de dicha parte que el espresado José es de edad de 22 años, corto de talla, poco discreto y que acostumbra llorar á las puertas cuando pide limosna: viste pantalon viejo de catin, un chaleco de paño fino viejo con remiendos de reaza vieja también, montera de paño fino remendada, añadiendo por último que es tartamudo.

Ruego por lo tanto á V. S. se sirva mandarlo anunciar en el Boletín oficial esta novedad, para que en caso de ser habido sea conducido á la casa materna y se evite funesto resultado que puede motivar su escasa inteligencia.»

Lo que se inserta en el Boletín oficial á fin de que los Alcaldes y mas dependientes de mi autoridad, hagan las correspondientes averiguaciones del joven espresado, y caso de ser habido, remitirlo al Alcalde de Castrelo de Miño para lo que correspondiere. Orense Julio 12 de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 359.

En oficio que me pasó el Sr. Gobernador civil de la provincia de Zamora, se me dice haber desertado en la tarde del 25 de Junio último del presidio de la carretera de Vigo situado en las Portillas, los confinados Ramon Fernandez Morras, Manuel Perez Perez y Juan Sanchez Barrero, cuyas medias filiaciones se insertan á continuación; y por lo tanto encargo á los Sres. Alcaldes, Comandantes de los puestos de la guardia civil, Agentes de vigilancia pública y mas dependientes de mi autoridad procuren por cuantos medios le sugiera su celo y actividad la captura de los referidos sujetos, poniéndolos seguidamente á mi disposición para lo que proceda. Orense Julio 10 de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Media filiación del confinado Ramon Fernandez Morras, natural de Lazagueria, partido y provincia de Pamplona, hijo de Pascual y de Isabel Morras, de estado casado y de oficio labrador; edad 31 años, estatura 5 pies 1 pulgada, ojos azules, nariz larga, pelo castaño, lo-

ca regular, barba poblada, cara redonda, color moreno.

Id. de Manuel Perez Perez, natural de Santa Maria de Ferreira, partido de Mouforte, provincia de Lugo, hijo de Eluterio y de Bernarda Perez, oficio jornalero y de estado soltero; edad 27 años, estatura 5 pies 4 líneas, pelo y cejas negro, ojos garzos, nariz regular, barba mediana, cara larga, color trigueño.

Id. de Juan Sanchez Barrera, natural de Golea, provincia de Sevilla, hijo de José y de Luisa, oficio del campo y de estado soltero; edad 36 años, estatura 5 pies 4 pulgadas, pelo y cejas negro, ojos azules, nariz regular, barba poca, cara redonda, color trigueño: señas particulares, hoyoso de vi-

Número 360.

En las Gacetas correspondientes á los dias 28 y 29 de Junio, 3 y 5 del actual, se leen los Reales decretos siguientes:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 2.º

Remitido á informe de las secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente de autorización para procesar á D. Antonio Reguera, Comandante del presidio de esa capital, por suponersele abusos en el castigo de un confinado, han consultado lo siguiente:

«Las secciones de Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento reunidas se han enterado del expediente de autorización, negada por el Gobernador de la provincia de Toledo al Juez de primera instancia de la capital, para procesar á D. Antonio Reguera, de cuyo expediente resulta:

Que habiendo quebrantado su condena Eduardo Ronquillo fué apresado y entregado nuevamente en el presidio de Toledo, donde lo destinaron á la sección de aguadores;

Que habiéndose resistido á verificarlo, manifestando que las espartañas que llevaba le tenían llagados los pies, le castigaron los cabos con las varas;

Que habiéndose quejado al Comandante, mandó este á los cabos que se le diesen respotar, y á todo trance sostuvieran la disciplina;

Que á pesar de esto el presidiario siguió resistiéndose y dirigiendo amenazas é injurias contra el Comandante y los cabos, los cuales le apalearon y causaron lesiones menos graves;

Que ostinando el Promotor fiscal y el Juez de primera instancia que tales lesiones fueron causadas á consecuencia de aquellas palabras dichas por el Comandante D. Antonio Reguera, cometiendo de este modo un exceso en el círculo de sus atribuciones, se solicitó la correspondiente autorización para procesarlo;

Que oídos el interesado y el Consejo provincial el Gobernador se negó á concederla, fundándose en que el Comandante no había hecho mas que mandar cumplir la Ordenanza;

Visto el reglamento para el orden y régimen interior de los presidios del Reino; vista la obligación 13.ª del art. 116 de la Ordenanza general de los mismos:

Considerando que los excesos que pueda haber habido en el castigo del confinado Eduardo Ronquillo no deben ser imputados al Jefe de establecimiento penal por no haber dado mas orden que la de cumplir con la Ordenanza del ramo, sin que esto releve de responsa-

bilidad a los cabos si hubiesen abusado de sus facultades.

Las secciones opinan que V. E. se ha de servir consultar a S. M. que se confirme la negativa de autorización acordada por el Gobernador de la provincia de Toledo.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas secciones, de Real orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1857. =Nocedal.= Sr. Gobernador de la provincia de Toledo.

Remitido a informe de las secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente sobre autorización para procesar a D. José Mayoral, Alcalde de Villavilla, con motivo de la fuga de un preso que era conducido por tránsitos de justicia, han consultado lo siguiente:

Estas secciones han examinado el expediente de autorización negada al Juez de primera instancia de Burgos por el Gobernador de la provincia para procesar a D. José Mayoral, Alcalde de Villavilla, de cuyo expediente resulta: que con motivo de haberse fugado un preso que caminaba por tránsitos de justicia, y de acuerdo con el ministerio fiscal, pidió el mencionado Juez de primera instancia al Gobernador de la provincia autorización para procesar al Alcalde de que se ha hecho mérito, al cual creía culpable, en atención a no haber empleado la debida vigilancia aun cuando la fuga tuvo lugar, según se presume, por una ventana que tenía tres rejas, cuyas barras se hallaron separadas con palanca, pues ninguna otra violencia apareció en la cárcel, donde fue encerrado el preso;

Que el Gobernador, de acuerdo con la Diputación provincial, denegó la solicitada petición, fundándose en que el Alcalde se había fugado en la seguridad de la cárcel, acordando que correspondía a la Administración el castigar la falta cometida por aquel;

Considerando que el Alcalde de Villavilla detuvo al preso fugado en la cárcel del pueblo con las seguridades que aquella ofrecía anteriormente, sin que se haya probado descuido criminal por parte del primero, ni menos con infracción de reglamentos;

Considerando que el art. 276 del Código penal exige, para que haya delito en la evasión de un preso respecto del empleado público encargado de la custodia, la circunstancia de connivencia, y aun cuando se estime como tal empleado para este caso al Alcalde, no aparece semejante delito;

Las secciones opinan que puede V. E. servirse consultar a S. M. la denegación para procesar a dicho Alcalde, acordada por el Gobernador de la provincia de Burgos.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas secciones, de Real orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 26 de Junio de 1857. =Nocedal.= Sr. Gobernador de la provincia de Burgos.

Remitido a informe de las secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente sobre autorización para procesar al Alcalde y Tenientes de Alcalde de Itrabo, por supuestos abusos de autoridad, han consultado lo siguiente:

Estas secciones han examinado el expediente en que el Juez de primera instancia de Motril pide autorización para procesar a D. Juan Antonio Vallejo, D. Antonio y D. Francisco Vallejo, Al-

caldes y Tenientes de Alcalde de Itrabo. Resulta de los antecedentes, que en 28 de Diciembre de 1856 se querreló ante el Juez de primera instancia el Alcalde, de que en la misma noche había sido maltratado por varios individuos de la Municipalidad, entre ellos D. Francisco y D. Antonio Vallejo. D. Antonio Saez Martin y otros Concejales, habiendo sido herido levemente el Escribano que le acompañaba.

Constituyóse el Juzgado en Itrabo, ratificóse el querellante, y declararon varios testigos. Según sus declaraciones, aparece que en la noche del 26 había una ríña en la plaza; el Alcalde quiso poner paz y separar a los contendientes a la voz de la Reina, a lo que le contestaron de una manera indecorosa; que habiéndose separado de aquel sitio el Alcalde, se le unieron los declarantes, y se dirigieron nuevamente al punto de la ríña; que habiendo vuelto a invocar el nombre de S. M. la Reina, el Regidor D. Antonio Miguel Gonzalez, D. Francisco y D. Antonio Vallejo, Tenientes de Alcalde, con dos o tres Regidores, acometieron al Alcalde, le tiraron al suelo y le patearon. Uno de los testigos es el Escribano D. José María Rico, quien asegura que, queriendo defender al Alcalde, fue herido levemente.

Reconocidos por el facultativo el Alcalde y Escribano, resultó que el primero tenía una equimosis en el abdomen, y el segundo una herida insignificante en la mano.

Se unió a la causa testimonio de otra que se seguía en el mencionado Juzgado sobre heridas a Antonio Vallejo Alvarez, en la cual por un Regidor comisionado al efecto por el Teniente Alcalde primero, se formó sumaria sobre este particular. De ella aparece por los dichos de varios testigos que fueron citados por el primer Teniente Alcalde, a fin de que le acompañaran a recorrer el pueblo al anochecer del día 25 de Diciembre; que habiendo encontrado a Vicente Alvarez con su cuchillo en la mano, le mandó desarmar y le condujo a la cárcel; pero hallándose a la puerta, se presentaron armadas dos personas del mismo pueblo con intención de libertar al preso, que fueron desarmadas, pero consiguiendo huir con este, porque no había querido dar el Alcalde la llave de la cárcel que se le había enviado a pedir; que no vieron en el sitio de la ocurrencia al Alcalde Juan Antonio Vallejo, ni saben que nadie le pegase. Entre los declarantes figuran los Tenientes de Alcalde y demás personas que, según la querrela, acometieron al Alcalde.

El Alguacil de Itrabo declaró que era incierto si le hubiese enviado a buscar la llave de la cárcel a casa del Alcalde, y que esto se hubiese negado a darla.

Pasó la causa al Promotor, quien opinó que resultaban cargos contra D. Francisco y D. Antonio Vallejo; pero que procediendo de actos en el ejercicio de sus atribuciones como Tenientes de Alcalde del pueblo, así como los Concejales que les acompañaban, se debía pedir autorización para proceder.

El Juez pidió en efecto la autorización para proceder contra los expresados, y además contra el alcalde D. Juan Antonio Vallejo. El Gobernador concedió autorización para procesar contra Don Francisco y D. Antonio Vallejo, y la negó en cuanto al Alcalde D. Juan Antonio; declarando innecesaria la autorización con respecto a los Regidores que acompañaban a los primeros.

Visto la ley de Ayuntamientos de 8 de Enero de 1845 en sus artículos 73, de su párrafo segundo, que declara de la competencia de los Alcaldes la adopción de las medidas necesarias para la seguridad personal, con arreglo a las leyes y disposiciones de las Autoridades superiores; 86, en que únicamente se con-

cede a los Tenientes de Alcalde el ejercicio de las funciones que, según los reglamentos, juzga el Alcalde oportuno cometerles como delegados suyos, además de la parte que les corresponda como Concejales.

Visto el art. 4.º párrafo octavo de la ley de 2 de Abril de 1845 para el gobierno de las provincias en que se atribuye a los Gobernadores conceder la autorización competente para procesar a los empleados o Corporaciones dependientes de su Autoridad, por hechos relativos al ejercicio de sus funciones.

Considerando que no hay nada en el expediente por donde se pueda creer que el Alcalde D. Juan Antonio Vallejo cometiese hecho alguno punible, antes al contrario consta que cumplió con su deber al presentarse con el Escribano Rico y otras personas en el sitio en que se había alterado el orden.

Considerando que los Tenientes de Alcalde y Concejales que en el tumulto se hallaban, no ejercían funciones administrativas al acometer al Alcalde, puesto que la ley no les concede las que querían arrogarse de encargados de la protección y seguridad pública, ni para ello estaban delegados por la Autoridad local;

Las secciones opinan pudiera V. E. servirse consultar a S. M. se confirme la negativa en cuanto al Alcalde, y se declare innecesaria la autorización en lo respectivo a los Tenientes de Alcalde y Regidores procesados.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas secciones. De Real orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 26 de Junio de 1857. =Nocedal.= Sr. Gobernador de la provincia de Granada.

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

«En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador y el Juez de Hacienda de Huelva, de los cuales resulta:

Que D. Juan Zambrano, vecino de Manzanilla, acudió en 6 de Junio de 1854 al Gobernador de la provincia, solicitando que requiriera de inhibición al Juez de primera instancia de la Palma, que le seguía causa criminal por haberse opuesto a que D. Juan Gil Aguilar, Concejalel Ayuntamiento de su pueblo, practicara una visita en el establecimiento que para la venta de carnes tiene abierto;

Que el Gobernador pidió informe al Juez, y este funcionario le manifestó que los hechos que motivaron los procedimientos contra D. Juan Zambrano constituyen injurias graves y coacción contra la persona del Regidor Aguilar, estando esto comprobado por testigos, y que resultan además indicios de amenazas y otros excesos contra el mismo Regidor en el acto de ejercer éste funciones administrativas, en virtud de comisión expresa que le había conferido el Ayuntamiento de que formaba parte; debiendo en su consecuencia calificarse todos los indicados actos de atentado y desacato grave contra la Autoridad;

Que con presencia de este informe, el Gobernador requirió de inhibición al Juez fundándose en que la resistencia opuesta por Zambrano debe castigarse, o bien gubernativamente según el art. 73 de la instrucción de 15 de Junio de 1845, o bien por el juzgado de Hacienda, de conformidad con lo prevenido en el art. 77 de la misma instrucción; pero de ningún modo por el Juzgado ordinario, mientras la Administración no declare que se han cometido delitos penados por el Código;

Que habiendo recibido este requerimiento el Juez de primera instancia de

la Palma, se declaró incompetente, y resultando este auto por la Audiencia de Sevilla, este Tribunal superior le aprobó, declarando que había de entenderse a favor del Juez de Hacienda respectivo;

Que pasados con este motivo los autos al de Huelva, se declaró competente para conocer en ellos, fundándose en que el delito de Zambrano está comprendido en el art. 189 o en el 580 del Código penal, y además en que declara explícitamente y bajo otro concepto su competencia los artículos 19, 54 y 64 del Real decreto de 20 de Junio de 1852.

Que habiendo oficiado el mismo Juez, a consecuencia de tal declaración, al Gobernador de la provincia para que le dejase expedito el ejercicio de su jurisdicción, este funcionario, oído el dictamen de la Diputación provincial y conformándose con él, se negó a separarse del conocimiento del negocio, fundándose en las disposiciones y consideraciones que anteriormente había expuesto, y además en lo de que Zambrano no puede ser considerado como reo de rebelión a la Autoridad, toda vez que el Regidor no exhibió, de conformidad con lo que previene, el art. 42 del Real decreto de 20 de Junio de 1852, la autorización que tuviera para practicar la visita que intentaba, debiendo por lo tanto y al tenor de lo prevenido en el art. 77 de la instrucción, repetidamente citada, corresponder al Jefe de la Administración imponer las penas de menor cuantía, que son las que habían de tener lugar en el caso presente.

Que, por último, habiendo seguido este negocio los demás trámites que previenen las disposiciones vigentes, vino a resultar por insistencia de ambas Autoridades, administrativa y judicial, el presente conflicto;

Visto el párrafo primero del art. 5.º del Real decreto de 4 de Junio de 1847, según el que los Gobernadores de provincia no pueden suscitar contienda de competencia en los juicios criminales, a no ser que el castigo o falta haya sido reservado por la ley a los funcionarios de la Administración, o cuando en virtud de la misma ley debe decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios o especiales hayan de pronunciar;

Visto el Real decreto de 23 de Mayo de 1845, dado para establecer derechos sobre el consumo de especies determinadas, cuyo art. 75 dice así: «La resistencia a las visitas o reconocimientos en los depósitos o puestos de ventas para que está autorizada la Administración, será castigada con una multa de 100 a 500 rs., y si se hiciere violentamente a mano armada, será considerado como rebelión a la Autoridad.»

Visto el art. 77 de la misma disposición, que dice de este modo: «La imposición de las penas que quedan señaladas corresponde al Jefe de la Administración del pueblo en que se ha cometido el delito, cuando solamente son pecuniarias y no exceda cada una de 500 rs., y las de las demás a los Juzgados respectivos de Hacienda;

Visto el Real decreto de 20 de Junio de 1852 que manda llevar a efecto, con varias modificaciones, el proyecto de ley sobre jurisdicción de Hacienda, y represión de los delitos de contrabando y fraude que estaba aprobado por el Senado, cuyo Real decreto, en su art. 45, previene que no se proceda al reconocimiento de edificio alguno por los agentes de la Hacienda pública, sin estar autorizados por mandamiento escrito de la Autoridad competente;

Considerando: 1.º que al tenor de lo dispuesto en el art. 5.º del Real decreto de 4 de Junio de 1847, solo en dos casos pudo el Gobernador de Huelva promover y sostener la presente contienda de competencia en la causa criminal comenzada, o en el de que le toca a él

castigar el delito ó falta cometido por Zambrano, ó en el de que á la Administración incumbiera igualmente decidir alguna cuestión previa, de la que pudiera depender el fallo que se había de pronunciar.

2.º Que no tiene lugar el primer caso en la cuestión pendiente, ya porque constando desde el principio que se había hecho resistencia violenta al Regidor Aguilar, y aun indicio de que la resistencia había sido á mano armada, claro es que se debía proceder y se procedía en averiguación de un delito de rebelión contra la Autoridad, y por lo tanto, que habría de tener lugar, en su caso, la aplicación de un artículo del Código penal vigente.

3.º Que por consiguiente no obsta para que esto así se estime lo que el art. 77 citado previene en su primera parte, puesto que evidentemente se desprendía de los primeros datos reunidos en este negocio, que no podía tratarse de imposición de penas pecuniarias; y si por el contrario, tiene aplicación exacta la segunda parte del mismo artículo, que la imposición de las demás penas que no sean las pecuniarias que señala, esté á cargo de los juzgados respectivos de Hacienda.

4.º Que tampoco resulta que se encontrase el Gobernador en el segundo de los dos casos propuestos, toda vez que ni se comprende que hubiera ninguna cuestión previa que resolver por parte de la Administración, cuando se trató desde el principio de un desacato á la Autoridad mas ó menos grave, mas ó menos comprobado, pero siempre como hecho criminal fuera del círculo en que ejerce sus funciones la Administración, y sin que pudiera por lo mismo esta adoptar decisión alguna de que dependiese el fallo de los Tribunales.

5.º Que el art. 42 del Real decreto de 20 de Junio de 1852 previene tan solo que los funcionarios que hayan de practicar las visitas á que se refiere, estén especialmente autorizados para ello como lo estaba el Regidor Aguilar, y no puede inferirse de aquí nada en favor de la conducta observada por el Gobernador de Huelva en este asunto, toda vez que aun cuando el Regidor Aguilar no hubiera tenido la autorización especial que consta tenía, no por eso dejaría de ser una Autoridad reconocida, ni estaría en las atribuciones de sus Superiores gerárquicos, en la línea administrativa, conocer del delito de rebelión que se cree cometido contra ella.

6.º Que todo esto supuesto, el Gobernador de Huelva no pudo, sin prescindir de lo prevenido en el art. 3.º del Real decreto de 4 de Junio de 1847, requerir de inhibición á la Autoridad judicial.

Oído el Consejo Real, vengo en declarar esta competencia mal formada, y que no ha lugar á decidirla. Dado en Palacio á 1.º de Julio de 1857.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal.

De Real orden lo comunico á V. S., con devolución del expediente á que es la competencia se refiere, para su inteligencia y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 2 de Julio de 1857.—Nocedal.—Sr. Gobernador de la provincia de Huelva.

Las que se insertan en el Boletín oficial de la provincia para conocimiento del público. Orense 10 de Julio de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

QUINTA SECCION.

Ayuntamiento constitucional de Paderne.

El repartimiento de la contribución territorial de este distrito muni-

cipal que ha de regir en el corriente año, se hallará espuesto al público, por término de cuatro dias, en el local que ocupa el Ayuntamiento; dentro de cuyo plazo, que corre desde el 13 inclusive al 16 del presente mes, podrán los comprendidos en dicho reparto concurrir á su examen y á informarse de la cuota que á cada cual fue impuesta, y en el mismo producir las reclamaciones de agravio que contemplen justas, pues pasado que sea no serán oídas. Paderne Julio 11 de 1857.—E. A., Antonio Puga.—D. S. M., Juan Tesouro Secretario.

Idem de Celanova.

Este Ayuntamiento acordó hacer saber por medio del presente periódico oficial á los maestros de carpintería y cantería que quieran interesarse en la construcción de un Alpendre ó Tinglado destinado al despacho de pescados en esta población, en la de varios efectos que se precisan en la sala de Audiencia y Gabinete del juzgado de primera instancia y en la recomposición del puente Pedrina, puerta principal y cinco puertas vidrieras en la sala de Sesiones, de conferencias, mirador y cuarto del despacho que ocupa la corporación; se presenten en estas consistoriales desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde del domingo veinte y seis del corriente en que quedarán definitivamente rematadas á favor del postor mas ventajoso, bajo el tipo de 5148 reales en que se han presupuestado por cuenta del fondo municipal y del partido; cuyo plano, presupuesto y pliego de condiciones estarán de manifiesto para que los licitadores puedan con arreglo á ellos hacer sus proposiciones. Celanova Julio 8 de 1857.—E. P., José Benito Reza.—D. O. D. S. S.—Ramon Alvarez, Secretario.

Idem de Riós.

Ultimado el reparto de inmuebles de esta alcaldía, se halla de manifiesto en la secretaría de Ayuntamiento desde esta fecha al 18 del corriente para que puedan informarse de él los interesados y hacer presentes los agravios que consideren; lo que V. S. se servirá mandar insertar en el Boletín de la provincia para conocimiento del público. Riós Julio 9 de 1857.—E. T. A., Antonio Gajo.—Francisco Delgado, Srío.

SEPTIMA SECCION.

Juzgado de Hacienda de Orense.

El Dr. D. Vicente Gutierrez Piñeiro, juez de Hacienda de la ciudad y provincia de Orense.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco Todea Freire, vecino de S. Mamed, Alcaldía de la Bola, partido de Celanova, para que dentro de 15 dias, se presente en este juzgado y escribanía del que refrenda, á fin de ser notificado de acusación fiscal propuesta en causa formada al mismo por aprehensión de 4 caballerías mayores y 18 quintales de sal; apercibido de que pasado que sea dicho término sin presentarse

y por su rebeldía, se suspenderá la causa con los estrados de este juzgado.

Dado en la ciudad de Orense á 4 de Julio de 1857.—Vicente Gutierrez Piñeiro.—Por mandado de S. S., Valentin de Novoa.

Idem de 1.ª instancia de Orense.

En causa criminal pendiente en este Juzgado, contra Ramon do Souto, de Gestosa, Alcaldía de Toen, por sospechas de hurto de patatas y guisantes á personas indeterminadas; he acordado en proveído de este día llamar á todas las que hubiesen notado falta de dichos frutos en sus propiedades, á fin de que se presenten dentro de diez dias á prestar declaración, y hacer las gestiones que les convengan. Dado en la ciudad de Orense á 9 de Julio de 1857.—Vicente Gutierrez Piñeiro.—Por su mandado, Pedro Antonio Cerviño.

Idem de Santiago.

Por el presente se cita y emplaza á todos los acreedores á la quiebra del comerciante de esta ciudad D. José Cabello, para que por sí ó por persona competentemente apoderada concurren á esta sala de audiencia el día 30 de Julio próximo y hora de 12 para celebrar junta á fin de hacer el correspondiente nombramiento de sindicos, en inteligencia de que á los no concurrentes se les tendrá por adheridos á lo que tanto respecto á dicha elección como sobre otro cualquier convenio haga y acuerde la mayoría sea cualquiera su número y las cantidades que representen, sin que los omisos puedan contravenirlo bajo pretexto alguno, según así se ha acordado en virtud de petición formal que hicieron nueve de dichos acreedores que concurren en 22 del corriente con objeto de certificar el tal nombramiento en forma que no pudo constituirse por no reunirse al número suficiente de interesados adoptándose por ello en caso tan especial, el medio de hacer público este llamamiento para los efectos oportunos y que pueda ser removido el obstáculo que dificulta la ulterior consecuencia del negocio.

Santiago 25 de Junio de 1857.—Luis Arias Ulloa.—Por mandado, Vicente Quiroga.

Idem.

Por el presente se anuncia el arriendo de la casa fábrica de curtidos denominada de Guadalupe, sita estramuros de esta ciudad, con los pilos y efectos de elaboración que constan inventariados y algunos terrenos á labradío, huerta y prado de su aneccion, cuyo tipo está señalado por peritos en 22 rs. diarios, procedente de la quiebra del comerciante D. José Cabello. Las personas que quieran interesarse en este arriendo, pueden hacer sus posturas ante el infrascrito escribano que tiene su oficio en las casas consistoriales y en una dependencia de la contaduría de hipotecas, advertidos de que las admitirá aun inferiores al tipo, y será adjudicado el remate al mas ventajoso postor en cantidad y condiciones, el día 30 de Julio próximo y hora de doce en esta sala de audiencia con deliberación y acuerdo de los acreedores de dicha quiebra que en el citado día y hora se reunirán para junta, y en inteligencia tambien de que se arrendará para otro destino que no sea el de la elaboración de curtidos, si por ventura no hubiere quien la tome para aquel objeto.

Santiago Junio 25 de 1857.—Luis Arias Ulloa.—Por su mandado, Vicente Quiroga.

SECCION DE ANUNCIOS.

COMPANIA GENERAL de CRÉDITO EN ESPAÑA.

EMISION DE LAS ACCIONES DE LA COMPANIA GENERAL DE MINAS EN ESPAÑA.

Sociedad anónima autorizada

por Real decreto de 6

de Mayo de 1857.

DURACION 99 AÑOS—DOMICILIO EN MADRID.

Capital social, 60.000.000 rs. vn. en 30.000 acciones de 2.000 rs. vn. cada una.

Primer desembolso:—el 25 por 100, ó sean 500 rs. vn. por acción en el acto de suscribirse.

Los accionistas tendrán derecho

1.º A un 6 por 100 de los capitales desembolsados.

2.º A la participacion proporcional en el reparto de las utilidades líquidas.

3.º Al derecho de adquirir acciones á la par, en las nuevas emisiones que se hicieren.

La compañía, que está definitivamente constituida, animada del noble deseo de realizar parte del grandioso pensamiento que ha presidido á su fundacion, cual es el Fomento de la Industria nacional minera, y el desarrollo de las empresas ya existentes, ha dado principio á sus operaciones en varios distritos, célebres por su riqueza metalúrgica; procediendo á la explotación de las minas, escoriales y fábricas de fundicion en Huelva, Linares, La Carolina, Posadas, Valle de Santullán, Guejar Sierra (sierra nevada) etc., etc.

Algunas de estas minas están dando considerables productos; sus fábricas de fundicion aseguradas por las enormes cantidades de minerales que encierran y por el beneficio de los ricos escoriales antiguos vivirán largo tiempo.

Las explotaciones ya empezadas aseguran próximos repartos de dividendos de alguna consideración; pero estos repartos no tardarán en ser de una importancia grande y positiva.

La Sociedad general de minas fija siempre en el sagrado deber que se ha impuesto, no se concretará en su completo desarrollo á la explotación de las minas que posee, ó adquiriera en lo sucesivo, sino que se encargará de la venta al extranjero de los productos de otras explotaciones, proporcionando así utilidades é inmensos recursos á los industriales y á las empresas mineras de España.

La compañía general comprende, de masado, para obrar de distinto modo, que sus mayores beneficios resultarán del decidido, poderoso é ilustrado concurso con que ayudará en general á la industria minera de la Península, y ya de una mezquina competencia que podría hacer para adquirir pertenencias de minas á las diversas compañías que se dedican ó puedan dedicarse á esta clase de industria.

Deseando la compañía fundadora interesar en su empresa al mayor número de personas, y convencida de que ningún país ofrece mas elementos que España para el éxito completo de lo que se ha propuesto, ha determinado reservar para los suscritores españoles 10.000 acciones que le serán entregadas á la par y por reparticion con arreglo á los pedidos.

Puntos de suscripcion en esta provincia: Orense, señores don Ignacio Saenz y hermano del comercio, calle de la Paz núm. 6.

ORENSE.—1857.

IMPRESA DE D. PEDRO LOZANO.